

laudatorio en exceso, me atrevo a señalar -puede que me equivoque- que falta alguna fórmula relativa a la prueba que regula el c. 1600. También añadirse, sobre todo, que en escritos de partes, informes periciales, decisiones judiciales, al incluirse textos que contienen juicios y opiniones, sobre materias jurídicas determinadas, se rebasa lo que tradicionalmente se viene exigiendo en los formularios para los diversos modelos de actos procesales. Aquí se nota -en nuestra opinión- esa larga experiencia profesional que el A. confiesa y esa colaboración de jueces eclesiásticos que agradece en la presentación de su Formulario.

Al insertarse en el libro las diversas fórmulas, ocupando la tercera parte aproximadamente de la obra publicada, hace pensar que este libro tiene exclusivamente un interés práctico por esa orientación didáctica, confesada en el prólogo, de dirigirse a laicos, quizás jóvenes profesionales que se inician en el foro judicial. Y ciertamente tal fin lo consigue plenamente, pudiendo también interesar a todo aquel que desarrolle labores en las Curias judiciales eclesiásticas. Sin embargo, la obra que comentamos llega mucho más allá de ese interés práctico por ser, sobre todo, un excelente compendio que puede servir de manual para el estudiante del Derecho procesal canónico, como puede servir asimismo de instrumento de trabajo auxiliar, con el que confrontar muchas cuestiones, para quien se preocupa de este Derecho procesal.

CARMELO DE DIEGO-LORA

ORGANIZACIÓN ECLESIASTICA

G. LO CASTRO, *Las prelaturas personales. Perfiles jurídicos*, 1 vol. de 314 páginas, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 1991.

El objeto de esta monografía -traducción de la que con el título *Le prelature personali. Profili giuridici* fue editada por Giuffrè en 1988- es descrito con claridad por su autor en la «Advertencia preliminar». Estudia distintos temas en relación con las prelaturas personales: su composición estructural, su naturaleza jurídica, los poderes del prelado, el acuerdo con las iglesias locales y otros muchos; y ello según diversas perspectivas -metodológicas, críticas, dogmático-reconstructivas, problemáticas-, a cada una de las cuales viene dedicado un capítulo (cfr. p. 7).

El enfoque es, en ocasiones -en abundantes ocasiones-, crítico; con una crítica, a mi juicio, bien planteada y mejor resuelta, de opiniones que, según subraya el autor, le «han parecido infundadas e inaceptables» (p. 8) y, precisamente por ello, ha recibido «los estímulos (...), sin los cuales probablemente no me hubiese decidido -dice- a acometer este estudio o a desarrollarlo como lo he hecho» (ibid.).

Desde mi punto de vista, lo que se deduce desde el principio -y así queda subrayado

vigorosamente- es una cuestión que tendría que ver bastante con un principio hermenéutico claro; principio que, al fin y al cabo, no es otro que el principio de identidad, que, a veces, por partir de unos presupuestos metodológicos poco adecuados, se oculta lastimosamente a algunos autores hasta llegar a perderse. El principio de identidad lleva a afirmar que las prelaturas personales son, ante todo y sobre todo, lo que son; es decir, *prelaturas*. Figura jurídica, por lo demás, bien conocida por todos los especialistas: estructuras jurisdiccionales de la organización pastoral y jerárquica de la Iglesia presididas por un Prelado del máximo rango que las gobierna con potestad de régimen (de jurisdicción).

Estas prelaturas pueden ser de dos tipos: a) *territoriales*, es decir, aquellas en las que el Prelado, con la cooperación de su presbiterio, tiene a su cargo la cura pastoral ordinaria y común de los fieles que tienen el domicilio o el cuasidomicilio en un determinado territorio; o dicho con otras palabras, aquellas que quedan especificadas por el elemento territorial; b) *personales*, es decir, aquellas en las que se encomienda al Prelado una cura pastoral peculiar en favor de distintos grupos de fieles en una región o nación o en cualquier lugar del mundo; o dicho con otras palabras, aquellas que quedan especificadas por el elemento personal; al no estar especificadas por el criterio territorial sino por criterios personales, su acción habrá de desarrollarse dentro del territorio perteneciente a las iglesias locales; y habrán de quedar siempre a salvo las competencias del Ordinario del lugar. Las primeras, actualmente, vienen reguladas en los cc. 368 y 370 del Código; las segundas, en la ley-marco que suponen los cc. 294-297. Pero unas y otras son lo que son -principio de identidad-; esto es, tienen la misma naturaleza: son *prelaturas*.

Lo cual parece repetir una inútil tautología; pero, como puede apreciarse si se lee atentamente esta interesante monografía -y en particular, sus tres primeros capítulos-, se ha hecho necesario, ante las opiniones mostradas por algún minoritario sector de la doctrina. En efecto, ha resultado preciso subrayar algo que al jurista, acostumbrado a interpretar la ley partiendo del criterio hermenéutico básico -el significado propio de las palabras, considerado en el texto y en el contexto (c. 17)-, le parece obvio: «Conviene subrayar también, para que no quede difuminado el significado innovador de la obra conciliar (...) -escribe Lo Castro-, que ni de los trabajos de la asamblea ecuménica, ni sobre todo de las deliberaciones finales que ésta adoptó (asumidas y desarrolladas por el romano pontífice) se deduce que la noción de prelatura, en cuanto especificada por el calificativo de 'personal', haya sufrido una mutación semántica: la prelatura, cualquiera que sea su calificación, sigue siendo una prelatura» (p. 15).

De gran interés resultan, por ello, los «perfiles metodológicos» que el autor traza en el primer capítulo, porque se trata, en definitiva, de los criterios que debe emplear siempre un jurista -si pretende serlo- al enfrentarse con el examen de una institución. «Para la correcta comprensión de un instituto -dice, por ejemplo, en la p. 26- no se puede prescindir de la aplicación que se ha llevado a cabo por la praxis administrativa, por la interpretación jurisprudencial y, antes que nada, por el mismo legislador a través de las normas particulares dictadas para el caso. De hecho, con este proceso de aplicación, el derecho se transforma de designio abstracto en vida concreta que estruc-

tura una sociedad determinada. No tomar en consideración -en la tarea de identificar rasgos característicos, naturaleza, finalidad, inserción en el ordenamiento vivo de la sociedad eclesial- los datos ofrecidos en distintos niveles por la experiencia jurídica, y afirmar al mismo tiempo que esas realidades son o deben ser las que se deducen de una visión doctrinaria de la Iglesia y de su ordenación constitucional, puede conducir, y efectivamente conduce, a algunas consecuencias que no se pueden compartir». «Mala interpretación -añade algo más adelante el autor-, y en cualquier caso poco respetuosa no sólo de la voluntad sino de la actividad del legislador, sería la que privase de significado y de efectos a la norma jurídica» (p. 27).

En relación con la necesidad de un correcto planteamiento metodológico y con referencia, en concreto, a la primera prelatura personal, el Opus Dei, el autor subraya que «para hacerse cargo, no según la perspectiva dogmática sino según la metodológico-pragmática, del instituto de las prelaturas personales se revela ciertamente útil y oportuno (y sería mejor decir: no se puede prescindir de) el examen de la primera prelatura personal instituida, en particular de la disposición normativa de institución (la const. ap. *Ut sit* del 28 de noviembre de 1982, promulgada oralmente y hecha ejecutiva con decreto del nuncio apostólico en Italia el 19 de marzo de 1983, a través del mandato expresamente conferido por el romano pontífice en la misma const. ap.) y de sus normas constitutivas (los estatutos, denominados *Codex iuris particularis Operis Dei* -sancionados por el art. II de la const. ap. *Ut sit*- cuyas líneas principales, por lo que respecta a la estructura del ente, fines, poderes internos de la autoridad, relaciones con las autoridades eclesiales, fueron sintetizados y anticipados en la (...) *decl.* de la Congregación para los obispos, *Praelaturae Personales* del 23 de agosto de 1982); normas institutivas y constitutivas que no pueden sino reflejar las disposiciones generales o remotas sobre la materia, a las que ya antes hemos prestado atención» (pp. 32-33) (En efecto, como el autor señala en la «Advertencia preliminar», ha reproducido íntegramente, en las notas del primer capítulo, el n. 10, 2º par. del decr. conc. *Presbyterorum Ordinis*, el m.p. de Pablo VI *Ecclesiae Sanctae*, I, 4, y el n. 49 § 1 de la const. ap. de Pablo VI *Regimini Ecclesiae Universae*: notas 4, 7 y 8 respectivamente. También recoge la const. ap. de Juan Pablo II *Ut sit*, en la nota 9).

De ahí que la perspectiva de estudio seguida se funde sobre la idea de que «mientras no se pruebe lo contrario, además de las normas generales y directivas que prefiguran y regulan un determinado instituto, es igualmente necesario para su cabal comprensión apreciar las normas particulares aplicativas; éstas no pueden entenderse de modo apriorístico como contradictorias, sino, muy al contrario, como coordinadas armónicamente con las primeras, sobre todo si se reconducen al mismo legislador y son, como en nuestro caso, prácticamente acordes en todo con ellas. A captar esta íntima armonía debe dirigirse el esfuerzo del intérprete, que no podrá sino llegar a los mismos resultados tanto si emprende su tarea investigadora comenzando por las disposiciones generales para llegar a las particulares, como si desde éstas quiere remontarse a las primeras» (p. 37).

De acuerdo con estas premisas, el capítulo segundo aborda los «perfiles críticos» (pp. 39-165), en los que, con gran finura jurídica y no menor bagaje técnico, tanto de

Derecho constitucional canónico, como de su Parte general y de Teoría general del Derecho, el autor examina la aislada opinión de algún sector doctrinal que no alcanza a comprender correctamente la configuración y naturaleza jurídica de las prelaturas personales. Y ello porque «un uso apropiado de los instrumentos metodológicos, concretado en primer lugar en el correcto establecimiento de los puntos de referencia conceptual, no es suficiente para la comprensión del instituto de las prelaturas personales si no va acompañado de la maduración práctica (es decir, en dirección de la praxis y por tanto del derecho) de algunas convicciones eclesiológicas (piénsese en la que se refiere a la función de los laicos, considerados implícitamente por una parte de la doctrina como no idóneos -puesto que se les niega la pertenencia a la prelatura-...) y de un adecuado conocimiento de los conceptos jurídicos (a veces inoportunamente forzados en su significado técnico)» (p. 165).

De particular interés me han parecido las páginas que el autor dedica al estudio del clásico tema de la interpretación de la norma y a la necesidad de una adecuada aplicación de los criterios hermenéuticos: todo ello en el marco de la correcta comprensión de la «racionalidad» de la *lex* (cfr. pp. 149-165). Se trata de un análisis realizado, a mi juicio, con verdadero rigor y con una notable calidad técnica y expositiva, en el que se ponen de relieve los riesgos de un abusivo recurso a la *mens legislatoris*: aquel que se realiza sobre la base de un subjetivismo contrario a la propia letra de la ley. «En efecto -subraya Lo Castro-, puede buscarse la *mens legislatoris* para llegar al significado último, valorativo de la norma; pero puede buscarse también como criterio justificativo de las propias opiniones o de la propia actuación para rechazar, de una manera que se tiene por no arbitraria, el dictado normativo. Precisamente los canonistas, más inclinados que los otros juristas a reflexionar sobre el designio de Dios, con la conciencia de que Éste representa el criterio último de la juridicidad, están expuestos a la tentación -a la que pueden resistir sólo si están dotados de un sentido de equilibrio poco común y de un gran sentido jurídico- de creer que ese criterio está mejor representado en sus propios puntos de vista que en lo expresado por el legislador humano, o de pensar que han entendido mejor que éste su propia *mens*; más expuestos a la tentación de contraponer fácilmente *voluntas legis*, tal como resulta del texto y de las palabras utilizadas, y *mens legislatoris*, que responde -acaso sin apercibirse siquiera- a las propias opiniones. La indicación de un *iter* que debe seguirse en la interpretación, compuesto de los pasos sucesivos indicados por el can. 17 (...) suena como una llamada para que el intérprete se guarde de atribuir al dato legislativo el significado que considera más acorde con las propias ideas, y para que lleve a cabo, por el contrario, un esfuerzo para captar el significado de la ley a través del modo como resulta objetivado en el texto» (pp. 154-155).

Trazados estos perfiles metodológicos y críticos (capítulos primero y segundo), el autor dedica el capítulo tercero a los «perfiles reconstructivos teóricos» (pp. 167-255), en los que, en definitiva, estudia la naturaleza jurídica de las prelaturas personales.

Y lo hace sobre la base de un sano realismo jurídico, que lleva a partir del dato objetivo, y no de una apriorística definición doctrinal en la que, luego, se pretenda encajar a toda costa la realidad misma, es decir, la cosa definida. Dicho con otras pala-

bras, en nuestro caso el autor parte -como no puede, ni debe ser de otro modo- del examen de las disposiciones normativas sobre la institución; y del estudio y observación de la institución misma -la prelatura personal- tal y como resulta del correcto análisis del dato normativo considerado en su conjunto.

Particularmente luminosos, para entender la naturaleza jurídica de las prelaturas, resultan, a mi juicio, estos párrafos que transcribo en su literalidad: «las prelaturas personales tienen origen merced a una voluntad fundante externa al ente y a los que pertenecerán a él: la voluntad de la Santa Sede, que puede erigirlas 'auditis quarum interest Episcoporum conferentiis' (can. 294); no pueden, por tanto, ser reconducidas en modo alguno a la voluntad de 'socios fundadores' o de un fundador privado. La voluntad de la Santa Sede determina al ente no sólo en su dimensión jurídica (lo cual es común a todos los entes -incluidos los asociativos- que adquieren la subjetividad en el ordenamiento mediante el otorgamiento de personalidad jurídica), sino también en cuanto a su existencia ontológica: la dimensión ontológica de las prelaturas personales, en efecto, viene dada por su existencia jurídica y coincide con ella. Sin el ejercicio concreto de la voluntad instituyente no se da el ente-prelatura personal» (pp. 206-207).

Y añade algo más adelante: «no puede darse una prelatura de hecho, no reconocida aún pero en vías de reconocimiento (como se da, por el contrario, la asociación de hecho, no erigida aún en persona jurídica pero igualmente regulada por el derecho: cfr. can. 310); no pueden darse relaciones interpersonales que sean adscribibles a la prelatura y que signifiquen la dimensión agregativa que le es propia antes de que la prelatura sea constituida. Ni existe tampoco un derecho a la institución de la prelatura (en un sentido que pueda recordar al derecho de asociación del que se trata en el can. 215: no es pensable una prelatura que sea expresión de un derecho de los particulares) que pueda hacerse valer ante la autoridad instituyente. Existe, por el contrario, un poder, y sólo un poder, de la autoridad de instituir la prelatura» (p. 207).

«La voluntad instituyente -precisa en este sentido el autor-, al instituir el ente en cuanto a su existencia ontológico-jurídica, lo constituye en su modo de ser jurídico, especificando ante todo sus finalidades esenciales (que justifican su institución) en el ámbito de las previstas por el derecho (can. 294: *apta presbyterorum distributio; peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus*), y determinando al mismo tiempo sus normas de funcionamiento y de organización, que son esenciales también, todo lo cual es atribuido al ente con el acto de institución y mediante actos normativos secundarios (los estatutos), que son reconducibles al acto de institución y son expresión de la voluntad fundante (can. 295 § 1: *ab Apostolica Sede condita*)» (p. 208).

Pero para calificar correctamente la institución no basta simplemente con tener en cuenta su origen, sino que ha de considerarse también su función: «el problema de calificación del ente ha de resolverse atendiendo no sólo al momento genético (y, en particular, a la autoridad que lo constituye), que no es *per se* decisivo (visto que la autoridad eclesiástica puede ser fuente tanto de entes institucionales en sentido estricto como de entes asociativos), sino también a la relación funcional con el ordenamiento. En efecto, si bien todos los entes, de cualquier naturaleza, concurren a fines eclesial-

mente relevantes, lo hacen, sin embargo, de modo diverso: directamente, en una relación orgánica de identificación funcional con el ordenamiento, los entes institucionales; indirectamente, a través del impulso y el desarrollo de la dimensión relacional de los fieles, los entes asociativos» (pp. 214-216).

El autor, en efecto, después de un denso y, al mismo tiempo, fino estudio que ocupa un buen número de páginas (pp. 167-254) -a las que aquí ya se ha hecho una leve referencia- y en el que entran en juego cuestiones de tanto calado doctrinal como las relativas a la distinción entre el elemento asociativo y el institucional en el ordenamiento canónico; la delimitación y conexión entre lo público y lo privado en la Iglesia; los fenómenos de personificación y subjetividad en Derecho canónico (tema, por lo demás, particularmente grato y familiar a Lo Castro); y otros de esta naturaleza, llega a la siguiente conclusión: «La prelatura personal se presenta como un organismo institucional, desarrollo de derecho humano de la línea organizativa *ordo-communitas*; un organismo que es expresión de la *sollicitudo* primacial *in bonum commune totius Ecclesiae*, al servicio de ésta (...). La peculiar función que desarrollan sitúa a las prelaturas dentro de la categoría de los entes estrictamente institucionales y las distingue de otros entes (diócesis) pertenecientes al mismo *genus*» (p. 251).

Tras unas precisiones en torno a las relaciones entre prelaturas personales e iglesias locales y, en concreto, tras el examen de las cláusulas de salvaguarda de la competencia de los ordinarios del lugar previstas en el Código (cc. 294 y 297), Lo Castro afronta en el cuarto y último capítulo algunos «perfiles problemáticos» (pp. 257-314). Y ello porque, entre otras razones, la inclusión de estas nuevas instituciones en las estructuras organizativas de la Iglesia, caracterizadas por una consolidada estabilidad, «plantea una serie de problemas prácticos y teóricos, cuya solución es necesaria para dar cuenta de la racionalidad tanto de la enunciación normativa general y abstracta del instituto, como del concreto hecho institutivo de cada prelatura personal (...)» (p. 259).

Entre otras cuestiones en las que no es posible detener aquí la atención -por ejemplo, las razones que justifican la institución de una prelatura personal; la relación entre voluntad privada y voluntad pública en la institución de la primera prelatura personal; la posibilidad de pertenencia plural a diversos entes institucionales-, pero que el lector encontrará minuciosa y coherentemente tratadas en las páginas de este capítulo, subrayaré simplemente una: la valoración crítica que el autor hace de la posición doctrinal según la cual es imposible formar parte de entes institucionales propios de la constitución y organización jurisdiccional jerárquica de la Iglesia a través de un acto voluntario; o dicho con otras palabras, la pertenencia a instituciones de la constitución y organización jurisdiccional jerárquica de la Iglesia es automática y se apoya en criterios objetivos (por ejemplo, domicilio, rito, condición de militar).

Lo Castro hace notar, con finura técnica y brillantez expositiva, que todo acto de incorporación a las estructuras institucionales de la Iglesia tiene naturaleza voluntaria. «Es necesario al respecto -dice- tener cuidado en no confundir la adhesión automática a un ente (como la que atañe a los entes territoriales, como las diócesis, las parroquias) con la adhesión obligada. La adhesión automática no es obligación de la voluntad, sino ficción de la voluntad, según un fenómeno que se verifica en todas las ramas del

derecho (desde el público hasta el privado); hasta tal punto que el fiel puede sustraerse con toda certeza a la automática adscripción al ente con que haga una concluyente manifestación explícita (en el caso del rito, por ejemplo) e incluso tácita (en el caso de cambio de domicilio). El hecho de no poder imaginar la pertenencia a la Iglesia sin pensar en pertenecer 'necesariamente' a una estructura suya (sea territorial o personal), expresa en realidad un hecho lógico, un requisito de coherencia, en virtud del cual el hombre no puede pretender estar en una situación y encontrarse al mismo tiempo en una situación diversa de aquella preelegida; pero no una necesidad absoluta, metafísica, contradictoria con el hecho jurídico, que se asienta sólo sobre el presupuesto de la libertad humana» (p. 294).

Y añade algo más adelante que el acto de adhesión a la prelatura personal tiene el mismo relieve y el mismo significado que el acto de adhesión a la Iglesia y a las iglesias locales o a otras estructuras jurisdiccionales jerárquicas en la Iglesia, precisamente porque la adhesión voluntaria y libre está en el fundamento, en la base de todas las estructuras eclesiales (cfr. p. 296).

La monografía termina con una exposición, entre otros aspectos, de la naturaleza de la jurisdicción del prelado -ordinaria propia (c. 295)- y de la coordinación entre prelaturas personales e iglesias locales (c. 297). Por otra parte, parece oportuno subrayar -como lo hace el autor en un *post scriptum* de su «Advertencia preliminar»- que el a. 80 de la const. ap. *Pastor Bonus*, de 28.VI.1988, dispone que pertenece a la Congregación de obispos todo lo que concierne a la Santa Sede sobre las prelaturas personales, como ya lo hacía la const. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, n. 49 § 1. «La norma (...) -escribe Lo Castro- confirma plenamente las conclusiones sostenidas a lo largo del presente trabajo sobre la naturaleza jurídica de las prelaturas personales, conclusiones que pueden recabarse también del reconocimiento de dicha competencia» (p. 9).

La cuidada y precisa traducción al castellano de esta monografía ha sido realizada por Javier Otaduy, con la colaboración de Jorge Miras y Antonio Viana. Y me parece conveniente llamar la atención sobre esta meritoria tarea, teniendo en cuenta, además, que se trata de una obra no fácil de verter con fidelidad a otro idioma por la riqueza de sus expresiones -puede verse, en este sentido y como ejemplo, la nota de los traductores en p. 215- y por la calidad técnica -y, por ello, en ocasiones muy gráfica- del lenguaje original.

JUAN FORNÉS

Eduardo BAURA, *Legislazione sugli Ordinariati castrensi*, Ateneo Romano della Santa Croce, ed. Giuffrè, Milano 1992, 1 vol. de 382 págs.

El tema de la asistencia pastoral a los militares católicos, canónicamente organizada en treinta países a través de los ordinariatos castrenses, presenta diversos aspectos